

Es copia que certifico. México, Octubre 14 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Trinidad Duarte, contra los procedimientos del Gefe político de Pénjamo, en virtud de los cuales fué juzgado y sentenciado á muerte.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: José Trinidad Duarte, solicitó en 28 de Marzo del presente año el amparo de la Justicia Federal contra el proceso que en el año de 1870 le instruyó el Gefe político de Pénjamo, considerándolo comprendido en la ley de 9 de Abril de 1869, que suspendió algunas garantías individuales para los salteadores y plagiarios, en cuyo proceso fué sentenciado á la pena de muerte. La Legislatura del Estado le concedió la gracia de indulto de la pena á que había sido sentenciado, y actualmente extingue en la Penitenciaría de Salamanca la de diez años de presidio. En el escrito de queja no se expresaron las garantías individuales en cuya violación se fundaba el recurso de amparo, siendo preciso requerir al quejoso para que lo hiciera; y en la diligencia practicada con este objeto por el C. Juez de letras de Salamanca, señaló las consignadas en los artículos 13, 16, 20 y 21 de la Constitución federal.

El C. Gefe político de Pénjamo, al rendir el informe de que habla el artículo 9 de la ley de 20 de Enero de 1869, acompañó como justificante una copia del acta criminal instruida contra el quejoso, y de conformidad con dicho artículo se mandó dar traslado al que suscribe, que por estar gravemente enfermo no pudo evacuarlo y la jus-

tificación del Juzgado, por constarle esta imposibilidad, lo hizo constar en otros recursos de amparo. Durante la dilación probatoria no se presentaron ningunas pruebas; y ya en estado de alegar, la esposa del quejoso presentó una información judicial, que el Juzgado mandó que se agregara para los efectos á que hubiere lugar.

El Promotor fiscal, según las constancias de que ha hecho mención, tiene que dar su parecer sobre la existencia de la violación de las garantías individuales que se han invocado.

La ley de 9 de Abril de 1869, en virtud de la cual fué juzgado y sentenciado el quejoso, suspendió en su artículo 1º, exclusivamente para los salteadores y plagiarios, las garantías de que habla la 1ª parte del artículo 13, la 1ª parte del artículo 19 y los artículos 20 y 21 de la Constitución federal; y en su artículo 3º dió facultades á las autoridades políticas de los Distritos, ó Gefes militares de la Federación ó de los Estados, para juzgarlos y sentenciarlos si resultaba probado el delito de plagio ó de asalto, á la pena de muerte.

José Trinidad Duarte, cita además de los artículos á que se refiere esta ley, el 16 de la Constitución; pero como se ha dicho, los Gefes políticos son autoridades competentes para juzgar y sentenciar á los salteadores y plagiarios, sin que pueda decirse lo contrario porque la ley de 9 de Abril 1869 no fué dada observando los trámites que se señalan en el artículo 127 de la misma Constitución, porque no envuelve una adición ó reforma del pacto federal, sino una suspensión de garantías individuales en los términos y en el caso que la dicha Constitución ha previsto en su artículo 27. Se pretende fundar la incompetencia del C. Gefe político de Pénjamo en los artículos 101 y 109, de la Constitución, por no nombrarse en el Estado los Gefes políticos por medio del sufragio popular. Este nombramiento se hace por el Ejecutivo del mismo, que es electo popularmente; no infringiéndose por tan-

to los artículos citados, que mandan que la forma de gobierno que deben adoptar los Estados, sea la de republicano, representativo, popular.

Se deduce de lo espuesto, que para resolver en el presente caso si debe concederse el amparo de la Justicia Federal, debe examinarse si el quejoso estuvo comprendido ó no en el decreto de 9 de Abril de 1869. En el acta criminal, cuya copia obra en estas actuaciones, está probado el robo con asalto perpetrado en la noche del día 29 de Setiembre en la casa habitacion del C. Justo Landeros por una gavilla de la que está probado tambien, formaba parte el quejoso; por las declaraciones de los CC. Justo Landeros y Antonio García, María Rodríguez, Francisca Gutierrez y María Dolores Hurtado. La prueba que forman estas declaraciones, justifica los procedimientos del Gefe político de Pénjamo, al considerar comprendido á José Trinidad Duarte, en la ley de suspension de garantías individuales que se ha citado. La informacion de testigos presentada despues del término de prueba, destruyendo las declaraciones de las personas que se han mencionado como falsos y cohechados, no puede fundar la procedencia del recurso; porque habiéndose intentado contra los actos del C. Gefe político Pénjamo, no las consideró en su sentencia, porque el reo no las presentó, y tuvo que faltar en vista de la prueba que resultaba en el proceso, segun la cual el quejoso está comprendido en el decreto de 9 de Abril de 1869.

Por las razones espuestas, el Promotor fiscal pide: se sirva el Juzgado denegar el amparo de la Justicia de la Union que solicita el reo José Trinidad Duarte.

Guanajuato, Mayo 28 de 1873.—*José Aguilar y Córdova.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guanajuato, 10 de Junio de 1873.—Visito el presente juicio de amparo promovido

por Trinidad Duarte contra el proceso que le instruyó el C. Gefe político de Pénjamo condenándolo como salteador á la pena de muerte, con violacion de las garantías que proclaman los artículos 13, 16, 20 y 21 de la Constitucion Federal y con infraccion de los artículos 109 y 201 del mismo Código, segun espone el quejoso, resultando: que en 3 de Octubre de 1870 la mencionada autoridad política, despues de los trámites que para juzgar á los salteadores y plagiarios establece la ley de 9 de Abril del mismo año, pronunció sentencia contra el promovente, imponiéndole la pena capital por considerarlo reo del robo con asalto que sufrió el C. Justo Landeros, en su casa habitacion, la noche del 29 al 30 de Setiembre del año referido, resultando: que de esta pena fué indultado Duarte, y que en la actualidad está extinguiendo la de diez años de presidio que le aplicó el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por via de conmutacion. Considerando: que por estar probado que cometió el delito que se le imputa, no tenia cuando se le procesó, el derecho de no ser juzgado por leyes privativas ni por Tribunales especiales, ni el de no ser sentenciado por las autoridades políticas, ni los otros derechos que sanciona el artículo 20 de la Constitucion, pues todos ellos quedaron suspensos para los plagiarios y salteadores por la citada ley de 9 de Abril de 1870. Considerando: que no se ha violado en perjuicio del quejoso la garantía del artículo 16 del Pacto Federal, en los términos que él asegura, supuesto que el C. Gefe político de Pénjamo ha sido competente para juzgarlo y sentenciarlo por el delito de robo con asalto, conforme á la repetida ley. Considerando: que el hecho de no emanar de eleccion popular el nombramiento de la autoridad que lo juzgó, no importa una infraccion de los artículos 101 y 109 de la ley fundamental de la República, porque estos preceptos no mandan que sean nombradas popularmente las autoridades políticas de las demarcaciones

en que se dividen los Estados; por tales fundamentos, de conformidad con el pedimento del C. Promotor fiscal y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez de Distrito declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Trinidad Duarte contra los procedimientos del C. Gefe del Partido de Pénjamo, en virtud de los cuales fué juzgado y sentenciado á muerte el quejoso como salteador, cuya pena le fué posteriormente conmutada en la de diez años de presidio.

Notifíquese este fallo á las partes; publíquese en el "Periódico Oficial" del Estado y remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos legales. El C. Juez de Distrito lo decretó y firmó. Doy fé.—*Albino Torres.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 19 de Junio de 1873.—*Luis G. Medina*, escribano nacional y público.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre 18 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por José Trinidad Duarte contra el Gefe político de Pénjamo por haberle juzgado conforme á la ley de 9 de Abril de 1870, contra salteadores y plagiarios con motivo de haber sido acusado de pertenecer á la banda de salteadores capitaneada por José Alcalá, y haber concurrido la noche del 29 de Setiembre de 1870 al asalto y robo de la habitacion de Justo Landerós, en que ademas fueron estupradas por la fuerza dos hijas de Dolores Hurtado, condenándolo á muerte la referida autoridad por estar á su juicio plenamente comprobada esta acusacion, con cuyos procedimientos cree el quejoso que se han violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 15, 16, 20 y 21 de la Constitucion Federal, y

Considerando: que por las constancias de la causa seguida á Trinidad Duarte y que obran en este recurso, aparece como uno de los autores de asalto y robo de la habitacion de Justo Landerós, verificado con las circunstancias agravantes de que se ha hecho mencion; que por la ley de 9 de Abril de 1870, expedida por el Congreso de la Union en uso de la facultad que le concede el artículo 29 de la Constitucion de la República, se suspendieron para los salteadores y plagiarios las garantías que otorga ésta en los artículos 18, 20 y 21, y ademas dió facultad á las autoridades políticas para juzgar á los reos de esta clase de crímenes, por lo que el Gefe político de Pénjamo ha sido competente para proceder contra el quejoso, sin infringir el artículo 16 de la referida Constitucion: con fundamento del artículo 101 de la misma, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 10 de Junio del presente año que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Trinidad Duarte contra los procedimientos del Gefe político de Pénjamo en virtud de los cuales fué juzgado y sentenciado á muerte el quejoso como salteador, cuya pena le fué posteriormente conmutada en la de diez años de presidio.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Orddz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*José M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar.*—Secretario.

Es copia que certifico. México, 25 de Octubre de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por D. Servando Gomez y Luna, contra la disposicion del Ministerio de la Guerra que ordena, que el expresado Gomez debe seguir extinguiendo la pena de diez años de presidio, que como conmutacion de la de muerte le impuso el C. Presidente de la República por el delito de seduccion.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez.

El Promotor fiscal dice: El Doctor Servando Gomez Luna, fué reducido á prision en la Penitenciaría de ésta ciudad por un delito ligero; pero como en 1869 fué condenado á la pena capital por intento de sedicion, cuya pena le fué conmutada por el C. Presidente de la República en la de diez años de peresidio, que no extinguió por haberse fugado de la cárcel, aunque por el delito ligero últimamente cometido hubiera sido puesto en libertad á los pocos dias, sin embargo, ha continuado preso desde hace mas de un mes á causa de la pena no extinguida, y por órden del C. Ministro de la Guerra, comunicada al Gobernador del Estado, contra esa providencia que califica Gomez Luna de arbitraria y contraria á las garantías inviolables, declaradas por los artículos 16 y 19 de la Constitucion, pide amparo sin señalar como debía, en cual de las fracciones del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869 apoya su recurso; pero sí alegando que por la amnistía decretada el 14 de Octubre de 1870, en favor de todos los delitos políticos y militares, le fué per-

donada la pena que al presente se lo hace cumplir. El Gobernador del Estado, al rendir el informe que se le pidió, manifiesta no ser el ejecutor del acto reclamado y no tener mas intervencion en el negocio, que prestar la Penitenciaría para la prision del quejoso, por órden del Ministerio de la Guerra, quien segun el telegrama que en copia se acompaña, considera á Gomez Luna, obligado á extinguir su condena de diez años, por que su delito no fué político, sino militar mixto.

Considerando el Promotor, en virtud de lo expuesto; primero: que la prision de Gomez Luna está fundada en la pena que le impuso la autoridad competente; segundo: que no corresponde al Juzgado de Distrito conocer y decidir en el juicio de amparo presente, si aquella pena fué perdonada al quejoso, en virtud de la amnistía que cita, ó debe considerarse en vigor, por haber sido militar mixto el delito por que se impuso, como asegura el C. Ministro de la Guerra; tercero: que mientras no haya una decision competente sobre el particular, la prision de Gomez Luna no puede considerarse como arbitraria y atentatoria á los artículos 16 y 19 de la Constitucion; y cuarto: que aunque en virtud de la manifestacion del C. Gobernador, de no ser el ejecutor del acto reclamado, pudiera ser conveniente, para mayor seguridad del Juzgado, pedir informe al C. Ministro de la Guerra: puede tambien considerarse como inútil y ocioso ese informe en vista del telegrama sobre el asunto del expresado Ministro.

Concluye el que firma, pidiendo: que la Justicia federal no ampare ni protega á D. Servando Gomez Luna, contra la disposicion del Ministerio de la Guerra, que motivó la prision de que se queja. Guadalajara, Mayo 6 de 1873.—

Es copia que certifico.—*G. J. Gallegos.*